

## EXTRACTOS *MEMORIAS I* de JOSÉ M<sup>a</sup> AZNAR

- PRÓLOGO: Mi decisión más difícil

La decisión más difícil que he tomado en mi vida fue la de mantener mi compromiso de no presentarme a un tercer mandato. Es decir, la de voluntariamente no permanecer más de ocho años seguidos en la presidencia del Gobierno de España. Fue una decisión personal, tomada y anunciada con mucha antelación; no fue fruto de ninguna ocurrencia o arrebató, a los que no soy muy proclive. Lo anuncié por primera vez durante una entrevista en una cadena de radio al final de la campaña de las elecciones europeas de junio de 1994. Entonces afirmé que «si alguna vez los españoles me dan la responsabilidad de presidir el Gobierno, sólo me presentaré una vez a la reelección». Era un compromiso firme y sincero, que respondía a dos convicciones que siempre han guiado mi actuación política: la de que cuanto más sólidas son sus instituciones, más fuerte es un país. Y la convicción de que las instituciones se afianzan cuando no existe una excesiva personalización de la política. De eso se trataba: de contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas de España, y de evitar la tentación de aferrarse al cargo, algo que en aquellos primeros años noventa había derivado en una clara degradación de la vida pública.

La historia demuestra que, pasado un tiempo en el poder, uno se acaba convirtiendo más en un mecanismo de resistencia que en un factor de innovación. Con esto no quiero decir que deba institucionalizarse la limitación de mandatos. Siempre he pensado que es difícil que un país genere oleadas sucesivas de buenos dirigentes, sobre todo en el caso de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Si las legislaturas duraran cinco años en lugar de un máximo de cuatro, tal vez podría contemplarse la limitación a dos mandatos para el Gobierno de la Nación. En todo caso, esta discusión no se planteaba en aquellos momentos. Mi decisión no fue fruto de ningún debate abierto en la sociedad porque ese debate no existía.

¿Por qué fue mi decisión más difícil? Lo fue porque estaba en la plenitud de mi vida política en cuanto a capacidad, resultados y aprobación. Lo fue también porque estaba en la plenitud de mi vida personal. Pero, sobre todo, lo fue porque presidir el Gobierno de España era una tarea que me apasionaba. Para alguien con vocación política, no hay reconocimiento más grande ni responsabilidad mayor que ser el presidente del Gobierno de tu país. Sé que nunca seré nada más importante de lo que he sido. Nunca seré nada parecido.

Por encima de la gestión de mi propia pasión política, me preguntaba si la idea de dejar el Gobierno después de ocho años sería una decisión acertada para España. ¿Estaré entendiendo correctamente la situación del país y mi responsabilidad ante los españoles? ¿Funcionará? ¿Causará un problema mayor? No eran preguntas fáciles de responder. Sin embargo, sobre todas ellas se impusieron la lealtad a la palabra dada y la certeza de que nadie es imprescindible.

La dificultad de la decisión se vio acentuada por la presión ambiental. Mi anuncio de que no optaría a un tercer mandato había tenido una amplia repercusión en los medios, pero muy pocas personas creyeron que fuese a cumplir mi palabra. Muchos pensaron que se trataba de la típica argucia política: primero la descartaron como una de las tantas promesas electorales que se formulan para llamar la atención, conseguir un titular y captar algunos votos en vísperas de unas elecciones. Y luego, cuando se fue acercando la hora de hacerla efectiva, decretaron que formaba parte de una maniobra

astutamente enrevesada para prolongar mi estancia en el cargo por aclamación popular. En opinión de esa mayoría incrédula, al final encontraría un buen pretexto para volver a presentarme. Recuerdo bien un almuerzo con la plana mayor del diario *El País* en la Moncloa. Tras escuchar atentamente mis argumentos, uno de ellos me dijo: «Me parece muy bien lo que has dicho, presidente, pero no lo vas a cumplir».

En el XVI Congreso Nacional del PP, que celebramos del 25 al 27 de enero de 2002, demostré que sí lo haría. En mi intervención como candidato a la presidencia del partido, dije que era la quinta y última vez que me presentaba. Que lo hacía por responsabilidad, para cumplir un compromiso con mi país, con mi partido y conmigo mismo. Que creía que el PP no debía ser nunca un proyecto personal, ni una agrupación al servicio de intereses particulares, ni una máquina de poder, sino que tenía que ser un buen instrumento al servicio de España. Y que lo había meditado a fondo:

«Sé muy bien que en toda decisión hay riesgos y hay ventajas, y estoy convencido de que estas decisiones aportan muchas más ventajas que riesgos. Yo no las hubiera tomado, tal vez, si tuviese o albergase dudas, si no supiese que entre nuestros compañeros, entre nuestros dirigentes, hay personas, mujeres y hombres, con muy grandes cualidades de liderazgo y que tienen que ser puestas cada vez de manifiesto con más intensidad. Tal vez si no pensase que hay jóvenes muy capaces, muy preparados, muy brillantes, en los que merece la pena confiar. Tal vez si no supiese y no hubiese trabajado tanto por la fortaleza de este partido, por su capacidad y por su proyecto. Tal vez no la hubiese tomado si no supiera que tenemos un gran proyecto capaz de unir a una gran mayoría de los ciudadanos españoles. Y tal vez hubiese tenido dudas si no estuviese convencido de que los españoles, si acertamos, van a seguir confiando en nosotros en las próximas elecciones para ganar, para gobernar y para seguir conquistando nuevas metas para nuestro país. Espero que eso sea así, pero tenemos que poner todos de nuestra parte para que así sea.»

Al escepticismo de unos se sumaba la oposición de muchos otros. Esta oposición se fue recrudeciendo con el tiempo y se hizo especialmente intensa en los meses previos a la propuesta de la persona que debía sucederme al frente del Partido Popular y como candidato a la presidencia del Gobierno. Mucha gente dentro y fuera del partido quería que reconsiderase mi decisión. Su reconocimiento era reconfortante. Me lo reclamaron aquellos a quienes yo pedí expresamente su opinión y me lo solicitaron también algunas personas por iniciativa propia. No sólo en España. Importantes mandatarios internacionales también me animaron a continuar. Para algunos, mi decisión era sencillamente incomprensible. Recuerdo una conversación con el presidente francés Jacques Chirac en la finca de Quintos de Mora, en los Montes de Toledo, con motivo de la última cumbre bilateral hispano-francesa que tuvo lugar bajo mi mandato. Chirac, que relataba los acontecimientos de Mayo del 68 desde su óptica como ministro del general Charles de Gaulle, me reconoció abiertamente sus dudas respecto a la sinceridad de mi compromiso. Me retó: «Si es verdad lo que me dices, me quitaré el sombrero e inclinaré la cabeza». Clinton, en una visita que hizo a España después de dejar la Casa Blanca, me preguntó: «Si la ley no te obliga a ello, ¿por qué lo haces? Si yo pudiera, si en Estados Unidos no existiera la limitación de mandatos, me hubiera gustado ser el presidente de mi país el resto de mi vida». No fueron los únicos. Otros, como Tony Blair, George W. Bush o Vladimir Putin, fueron especialmente expresivos en sus opiniones a favor de que continuara.

En España, una de las personas que con más vehemencia se manifestó públicamente en contra de mi decisión de no presentarme a la reelección fue Manuel Fraga. Ocurrió en abril del año 2000, en un mitin celebrado en Sevilla con motivo del décimo aniversario del congreso en el que asumí la presidencia del PP y unos días

después de nuestra victoria por mayoría absoluta. Desde lo alto del escenario, con toda la fuerza y autoridad que era capaz de exhibir, Fraga soltó: «Si no lo digo, reviento. ¡No hagas planes a menos de diez años!

¡El proyecto que necesita España no puede hacerse en menos de diez años!». Otros no se atrevían a tanto. Dejaban las invocaciones para conversaciones privadas, de las que tuve muchas, sobre todo a medida que se fue acercando la fecha que me había fijado para hacer efectivo el relevo. Recabé la opinión de mucha gente, sobre todo de dirigentes relevantes del Partido Popular. El propio Fraga, al comprobar que mis intenciones eran firmes, me dijo: «Si hay que aguantar que estés sólo ocho años en el Gobierno, lo aguantaremos. Pero el partido no lo dejes. El partido, no». Le contesté que las decisiones no se pueden tomar a medias.

Con los ministros, salvo contadas excepciones, preferí no abordar el tema. Y a quienes venían a verme con la intención oculta y sin embargo evidente de condicionar mi decisión respecto a la persona que me fuese a suceder, les preguntaba, de forma genérica, cómo veían las cosas. Puesto que las personas —y en especial los políticos— suelen ser precavidas, también me contestaban con generalidades: me pedían que siguiese y luego me hablaban mejor de unos aspirantes que de otros, dejando entrever sus simpatías y afinidades personales.

Con esta ronda de consultas yo no pretendía trasladar ninguna duda sobrevenida acerca de una decisión que ya estaba tomada, sino transmitir a mis interlocutores que en un momento próximo la maquinaria de la sucesión iba a ponerse en marcha y que debían estar preparados. Además, me interesaba escuchar a unos y otros porque en conversaciones de este tipo uno siempre se entera de cosas interesantes. Como es lógico, también lo hablé con Ana y con mis hijos.

Aunque no pedí expresamente su opinión, tanto Adolfo Suárez como Leopoldo Calvo-Sotelo me trasladaron en reiteradas ocasiones su criterio en contra de una retirada que consideraban prematura. Ambos lo hicieron en nombre propio y, según me pareció entender, por encargo de otras personalidades relevantes del momento. También recibí la visita en la Moncloa de personas que habían sufrido la violencia del terrorismo, víctimas de ETA y sus familias, a quienes escuché con especial interés, atención y —debo reconocerlo— emoción. No olvidaré lo que me dijeron: «¿Qué va a ser de nosotros cuando ya no estés en el Gobierno?». Pero la decisión estaba tomada y yo iba a cumplir mi palabra.

El viernes 29 de agosto de 2003, al finalizar el Consejo de Ministros, pedí a todos que se quedaran un momento: «Ha terminado el Consejo de Ministros. Os pido que os quedéis un minuto. Ha llegado el momento. Quiero que sepáis que he dado instrucciones al secretario general del partido, Javier Arenas, para que convoque un Comité Ejecutivo el lunes que viene y una Junta Directiva el martes. Quiero proponer al partido la persona que creo que debe ser el próximo candidato a la presidencia del Gobierno».

Esa misma tarde, llamé a todos los dirigentes regionales del Partido Popular para decirles que la decisión estaba tomada y para pedirles su respaldo. Todos me mostraron su apoyo.

A última hora, pedí a Mariano Rajoy que viniera a verme a mi despacho. Nos sentamos frente a frente. Le di las gracias por venir. Me dijo: «Presidente, prefiero que no me digas lo que intuyo que me vas a decir. Pero quiero que sepas que siempre te estaré agradecido. Nunca olvidaré que me has hecho cinco veces ministro y, además, vicepresidente del Gobierno. Con esto, todas mis aspiraciones políticas están más que

colmadas». Le contesté: «Gracias, pero te lo voy a decir. Creo que tú eres la persona adecuada».

Fue una conversación breve, pero intensa en emociones. A Mariano se le veía muy contento y, lógicamente, también abrumado. Me dijo que aceptaba el encargo y yo sólo le pedí que de momento no le comentase nada a nadie. «Esta conversación es sólo entre nosotros, porque la convocatoria con los demás, incluido tú mismo, será mañana.» Recuerdo que me preguntó: «¿Ni siquiera a mi padre?». «Ni siquiera a tu padre.»

A mediodía del sábado, convoqué a Mariano Rajoy, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja en la Moncloa. Pedí que se sumara a la reunión Javier Arenas, como secretario general del partido. Nos sentamos en torno a una mesa baja en mi despacho. Todos sabían a qué venían y fui directamente al grano. Les dije que eran unos momentos muy difíciles y muy importantes para todos, que teníamos una responsabilidad muy grande y que el único criterio que yo había tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión sobre la persona que quería proponer como sucesor era el interés general. El interés de España. También les dije que era muy consciente, probablemente más que nadie, de que los tres tenían grandes cualidades, pero que las decisiones se toman en un momento determinado, con un horizonte concreto. En aquellas circunstancias, frente al complicado panorama que se abría ante nosotros y ante el país, mi opinión era que la persona más indicada para sustituirme como líder del Partido Popular y candidato a la presidencia del Gobierno de España era Mariano Rajoy. Recuerdo mis palabras:

«No hace falta que os diga el aprecio y la gratitud que os tengo por todo el trabajo de estos años. Sólo quiero que entendáis que en mi decisión no he pensado en nada más que en intentar servir lo mejor que sé al interés general de España. Con este criterio, he pensado que la persona que mejor puede hacerse cargo de la situación en estos momentos es Mariano.»

Le pregunté si aceptaba. Aceptó y agradeció. Jaime y Rodrigo también dijeron que aceptaban la propuesta. Como es natural, su respuesta llevaba aparejada una cierta resignación, pero también una disponibilidad clara e incondicional para colaborar con Mariano, y así lo manifestaron los dos. Les dije que iba a hacer una cesión completa de mis responsabilidades en el partido. Eso implicaba que Mariano debía asumir la secretaría general del PP con todos los poderes y dejar la vicepresidencia del Gobierno, que pasaría a ejercer Javier Arenas. Javier aceptó el cargo, se puso a disposición de Rajoy y los cinco salimos al jardín para comer. Antes del almuerzo hice dos llamadas: al Rey y a Manuel Fraga. El Rey tomó nota de la decisión y Fraga me dijo: «Me alegro porque has elegido la mejor opción». No estoy seguro de que fuese lo que pensaba, pero ésas fueron sus palabras. Después le dije a Mariano: «Ya puedes llamar a tu padre».

Al día siguiente, el domingo 31, invité a Mariano y a su mujer, Elvira Fernández, a quienes todos llamamos *Viri*, a que nos acompañasen a Ana y a mí a la finca toledana de Quintos de Mora. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con profundidad sobre las implicaciones y procedimientos de la sucesión. Yo quería trasladarle a Mariano cercanía y tranquilidad porque él y yo no habíamos sido amigos como lo éramos algunos otros de la misma generación política del PP. Además, yo era consciente, porque lo había vivido con Fraga, de que todas las sucesiones son difíciles. Por eso le insistí mucho a Mariano en que a partir de ese momento debía hacer las cosas a su aire, a su manera. Le dije que eligiera a sus colaboradores, que teníamos mucha gente muy buena y muy preparada: «Tienes toda la libertad para tomar las decisiones que tengas que tomar. Cuando lo consideres necesario, me llamas. Y si no lo consideras necesario, no me llamas». En definitiva, quería que Mariano se sintiese absolutamente libre para tomar todas las decisiones que le pareciesen oportunas. Y eso incluía, por

supuesto, las decisiones sobre las personas. No le sugerí ningún nombre, ni aquel día ni después. Jamás le propuse a nadie. Rajoy me comunicó allí mismo, en Quintos de Mora, su primera decisión: «Quiero que mis colaboradores principales sean Ángel Acebes y Eduardo Zaplana». Incluso llamó a Ángel delante de nosotros. Más adelante me dijo que quería a Gabriel Elorriaga para dirigir su campaña electoral. Tampoco ese nombre se lo sugerí yo, aunque conocía bien la capacidad de Gabriel porque estuvo en mi Gabinete durante nuestra primera legislatura en el Gobierno.

También le dije a Mariano que no asistiría a las reuniones del partido. Y así fue. Rompí esa norma de forma excepcional dos veces. Acudí al Comité Ejecutivo celebrado tras la derrota electoral de marzo de 2004 porque no quería que se pudiera pensar que intentaba esconderme o que no daba la cara. Si hubiésemos ganado, no habría ido para evitar que se dijese que pretendía apropiarme de parte de la victoria. Y acudí al Comité Ejecutivo celebrado tras el triunfo electoral de noviembre de 2011 para manifestar mi alegría y felicitar al nuevo presidente del Gobierno y al conjunto del partido.

Nadie me obligó a irme, y si lo hice no fue para seguir ejerciendo el poder. Si hubiera querido seguir ejerciéndolo, me habría quedado. Me fui porque creí que eso era lo mejor para España. Y me fui con todas las consecuencias. El 2 de septiembre de 2003, la Junta Directiva Nacional refrendó a Mariano Rajoy como secretario general del PP y candidato a la presidencia del Gobierno. A partir de ahí, Mariano pudo actuar con total libertad, y así lo hizo.

Es evidente que un relevo como el que estábamos protagonizando tenía sus complicaciones. Se trataba de una situación inédita: en la política española nunca había ocurrido que un presidente del Gobierno en ejercicio, y menos aún con el respaldo mayoritario de los ciudadanos, decidiese ceder voluntariamente el testigo y renunciar a la posibilidad más que verosímil de un tercer mandato. Sin embargo, ocurrió, y creo que, en líneas generales, la operación salió bien. De hecho, estoy seguro de que habría salido perfectamente si no hubiese sido por los atentados del 11 de marzo de 2004.

Entre los dirigentes y cuadros del partido, la actitud ante la sucesión era, en general, de acatamiento. Unas veces había resignación y otras no tanto. El grito de «¡no te vayas!» en los mítines de la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2003 me emocionaba. Guardo un profundo agradecimiento a los militantes y simpatizantes del partido por esas manifestaciones de aprecio y lealtad. Según las informaciones que me llegaban, aunque nadie en el partido quería que me fuera, una vez asumido que lo iba a hacer, todo el mundo estaba dispuesto a aceptar a la persona que propusiese para liderar el PP. Creo que a esas alturas, conociéndome como me conocían, siendo como soy una persona bastante previsible, sabían que respetaría una cierta jerarquía interna en el partido. Lo que yo llamo la jerarquía histórica del PP.

Desde el principio, había tenido claras la necesidad y la importancia de respetar esa jerarquía. Para el partido y para España. Primero, porque la política española ya se había rejuvenecido mucho desde la Transición, incluso demasiado, con saltos generacionales muy grandes. Y, segundo, porque España y el Partido Popular estaban por fin en una posición objetiva de fortaleza que hacía posible la continuidad sin crisis. España se había convertido en un ejemplo de pujanza económica, bienestar social y proyección internacional. No hubiese sido lógico ni justo ni positivo que una decisión absolutamente personal como la que yo había tomado de no optar a un nuevo mandato acabase afectando a toda una generación del PP. Era una generación de políticos muy brillantes, que habían colaborado conmigo de manera leal y eficaz durante muchos años. Quería que mi decisión formase parte de un proceso lógico en el que, en la medida de lo posible, se respetase el orden natural de los liderazgos dentro del partido. Y eso significaba que la persona llamada a sucederme debía estar entre los tres dirigentes con

más peso histórico y político en el PP: Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y Mariano Rajoy.

La preocupación por preservar una cierta continuidad en el partido no suponía una aversión al cambio. Era consciente de que la sucesión suponría en muchos sentidos un punto de partida. Es más, estaba convencido de que la persona que me relevase debía representar algo distinto. De ninguna manera quería favorecer con mi actitud la impresión de que yo pretendía seguir manejando el partido desde la sombra. Entre otras cosas, porque conocía muy bien la historia del PP, con sus virtudes y sus defectos.

A la hora de valorar las distintas opciones, los criterios fundamentales eran, para mí, tres: que se garantizase una continuidad básica de las políticas desarrolladas con éxito por el Partido Popular en el Gobierno; que se preservase la jerarquía interna del partido, sin rupturas generacionales innecesarias, y que la persona que me relevase no fuese ni pudiese ser vista por nadie como una prolongación personal mía.

En mi entorno más cercano, había opiniones muy variadas respecto a quién reunía mejor estas condiciones. Unos eran partidarios de unos, otros de otros; unos consideraban más apropiados a unos, y otros, a otros. El debate no se circunscribía a las tres personas ya citadas. También se especulaba con los nombres de Ángel Acebes, de Alberto Ruiz-Gallardón y, en algunos círculos del partido, con el de Eduardo Zaplana. El nombre de Acebes circuló mucho, hasta el punto de que, media hora antes de que se hiciese público que yo iba a proponer a Mariano Rajoy, la Cadena SER anunció como gran exclusiva que el sucesor era Ángel.

En un momento dado, me informaron de que Rodrigo y Mariano habían llegado a una suerte de pacto o acuerdo: en caso de que el sucesor fuese uno de ellos, lo aceptarían, pero si finalmente resultaba ser cualquiera de los más jóvenes, intentarían cerrarle el paso.

El dato no me generó la más mínima inquietud: me parecieron movimientos lógicos de personas con una legítima ambición, que esperaban hacer valer su peso y autoridad en el partido. Sin embargo, sí me confirmó la impresión que yo ya tenía acerca de las posibles consecuencias de mi decisión: si al final me decantaba por uno de los dirigentes de la nueva generación —alternativa que, como he dicho, tenía sus candidatos, sus argumentos y sus defensores—, el conjunto del partido lo habría aceptado, pero las personas con legítimas aspiraciones no lo habrían considerado justo ni razonable. Por tanto, lo más conveniente era respetar el orden natural de las cosas, sin más emociones que las estrictamente necesarias, que ya eran bastantes.

Hubo sólo un momento en el que llegué a plantearme la posibilidad de proponer a una persona de la nueva generación del PP. Fue ante la hipótesis de que las elecciones municipales y autonómicas nos fueran tan mal como pronosticaban algunas encuestas. Estaba convencido de que podíamos ganar y salí a ganar. Pero si hubiéramos sufrido el batacazo que quería la izquierda, quizás habría llegado el momento de considerar que los dirigentes de mi generación cediésemos el testigo a la siguiente. En todo caso, esta hipótesis ni siquiera llegó a plantearse porque los resultados de las elecciones municipales fueron excelentes. Incluso mejoramos en medio millón de votos el resultado de 1999.

Con el criterio de la jerarquía histórica del PP, el sucesor natural parecía ser Rodrigo Rato. Así lo entendí y así se lo hice saber unos días después de nuestra victoria en las elecciones generales de mayo de 2000. Le pregunté a Rodrigo qué quería hacer. Teníamos que formar Gobierno y le ofrecí la posibilidad de escoger el puesto que quisiese: ministro de Economía y Hacienda, como hasta entonces; ministro de Asuntos Exteriores; vicepresidente primero del Gobierno; o incluso compatibilizar el Ministerio

de Asuntos Exteriores con la vicepresidencia primera del Gobierno. Rodrigo me contestó que le gustaría seguir al frente del Ministerio de Economía, pero que ya no quería ocuparse de los asuntos de Hacienda. Es decir, me proponía que volviésemos a crear un Ministerio de Hacienda desgajado del de Economía, como antes de nuestra llegada al Gobierno en 1996. La idea no me gustaba nada, pero la acepté. Primero, porque me lo pedía Rodrigo. Y, segundo, porque contábamos con personas competentes para gestionar la Hacienda Pública y pensé que ello podía contribuir a reforzar un área importante.

Lo que desde luego no me parecía razonable era que ni Rodrigo ni nadie fuese al mismo tiempo vicepresidente primero y ministro de Economía. Es cierto que a partir de septiembre de 2003, tras la salida de Mariano del Gobierno, Rodrigo compatibilizó ambos cargos y dejó la vicepresidencia segunda en manos de Javier Arenas, al que Rajoy había sustituido como secretario general del PP. Pero estábamos ya en la recta final de la legislatura, a pocos meses de las elecciones generales. Como regla general, mi opinión era contraria a la acumulación de estos dos cargos, por una razón muy sencilla: en ese momento me parecía que la carga de trabajo del vicepresidente primero era ya lo suficientemente abultada como para que la misma persona tuviese que ocuparse también de los asuntos económicos.

Unos meses después de nuestro primer intercambio, tuve una segunda conversación con Rodrigo sobre sus aspiraciones. Fue en las Navidades de 2000, en un largo viaje en coche que hicimos juntos a la estación de esquí de Baqueira, en los Pirineos. Rodrigo y yo teníamos una relación de mucha confianza y llegamos a ser muy amigos, no sólo porque llevásemos trabajando más de veinte años juntos. Nos conocemos desde el año 1978. Nuestros padres habían sido amigos por su relación con el mundo de la radio. Nuestras madres eran amigas por ser asturianas las dos y conocerse desde jóvenes. Y también nuestras mujeres, Ana Botella y Gela Alarcó, eran amigas. Rodrigo tiene cerca de Carabaña, en la Alcarria, un molino muy bonito en el que pasamos muchos fines de semana en familia. También acudimos allí casi todas las jornadas de reflexión antes de las elecciones.

Durante aquel viaje en coche a Baqueira, le anuncié a Rodrigo que iba a cumplir mi compromiso de no estar más de ocho años en el Gobierno. Le dije que debía pensar seriamente si quería ser el próximo líder del PP y el candidato a la presidencia del Gobierno. La primera reacción de Rodrigo fue decirme que mi renuncia provocaría un lío monumental y que debía reconsiderar mi decisión de no presentarme. Esa misma noche me planteó objeciones concretas a su candidatura. Me dijo que por motivos personales —tenía niños muy pequeños— no se veía capaz de asumir una responsabilidad tan relevante en esos momentos. Esa misma semana volví a insistir: «Piénsate bien lo que te he dicho. Aún faltan cuatro años. Tienes tiempo. Yo no hablaré del asunto con nadie». Esta vez Rodrigo no me contestó directamente. Tres meses después me encontré con su respuesta en una carta dominical del director de *El Mundo* que se titulaba «Rodrigo no quiere». Lo que no me había dicho a mí se lo había contado a un periodista. No volvimos a hablar del asunto hasta el verano de 2003, unos días antes de marcharnos de vacaciones. Entonces fue Rodrigo quien puso el tema sobre la mesa. Me anunció que había cambiado de opinión y que ahora sí quería ser el candidato del PP a las elecciones generales previstas para el mes de marzo siguiente. Le contesté: «Tú me has dicho dos veces que no». Y él respondió: «Pero ahora te digo que sí». No le contesté nada. Sólo tomé nota.

Nuestra última conversación a solas sobre la sucesión tuvo lugar ya a finales de agosto de 2003, el sábado 30 por la tarde, después de la reunión en la que les anuncié a los tres y a Javier Arenas mi decisión. Cuando terminamos de comer, le pedí a Rodrigo

que se quedase un momento. Quería tener un gesto de deferencia hacia él. Entonces me volvió a decir: «Pues ahora hubiese querido». Yo sabía que él quería. Lo sabía entonces y lo supe en el momento de tomar la decisión. Sin embargo, después de una reflexión larga y profunda, había llegado a la conclusión de que elegir a Mariano en lugar de a Rodrigo tenía más ventajas que inconvenientes.

La designación de Rajoy obligó a Rato a reflexionar sobre su futuro y a rehacer sus planes. Poco después de nuestra comida en la Moncloa, me pidió ayuda para optar a un puesto de gran relevancia económica y política: la dirección del Fondo Monetario Internacional (FMI). Era una apuesta complicada. Había otros candidatos de mucho peso, como el francés Jean Lemierre, presidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, o el italiano Mario Monti, entonces comisario de Competencia de la UE y ahora primer ministro de su país. Pero Rodrigo tenía posibilidades: gozaba de mucho prestigio y era un hombre muy respetado, también fuera de nuestras fronteras. Rodrigo fue decisivo en el gran éxito económico español de los ocho años de mi Gobierno y así era reconocido por todos. Contaba con el apoyo de Francia: no directamente de Chirac, pero sí del entonces primer ministro, Jean-Pierre Raffarin. Y, lo más importante, España había conseguido una posición de fortaleza internacional inimaginable unos años antes. Teníamos voz y voto. Contábamos.

En cuanto Rodrigo me lo pidió, me puse manos a la obra y comencé a recabar apoyos para su candidatura. Lo hice con mucho gusto. Llamé personalmente a cuatro personas: George Bush, Tony Blair, Jacques Chirac y Gerhard Schroeder. De los cuatro, los realmente determinantes, por su peso y capacidad de influencia, eran Bush y Blair. A ellos les pedí de manera especial que respaldasen a Rato. La respuesta de ambos fue incondicionalmente positiva: me aseguraron un apoyo cerrado para Rodrigo y se lo dieron, incluso después de que perdiéramos las elecciones.

Quizás por eso me costó comprender la posterior reacción de Rodrigo. Yo era consciente de su decepción ante el desenlace de la sucesión y sabía que, después de tantos años de amistad, nuestra relación ya no sería la misma. Sin embargo, no esperaba que Rodrigo pusiese una distancia tan grande desde tan pronto. Yo le llamaba para interesarme por el buen desarrollo de nuestras gestiones para lograr su nombramiento al frente del FMI, pero él a mí no me llamaba para contarme nada. La constatación de que se había abierto una brecha se produjo con motivo de la primera visita que Rodrigo realizó a España ya como director gerente del FMI, en la que se citó con una amplia representación del mundo político y económico español. A mí no me llamó.

Con Jaime Mayor, las cosas fueron más fáciles. Su reacción tras conocer que yo me decantaba por Mariano como candidato fue de absoluto respeto, colaboración y lealtad. Nunca, ni en aquel momento ni después, me hizo la más mínima insinuación ni el más mínimo reproche. Probablemente, Jaime era consciente de que tenía menos posibilidades que Rodrigo o Mariano. No porque no contase con mi afecto, respeto y consideración personal, que sabía que los tenía y en gran cantidad. Jaime y yo somos muy amigos. Siento especial afecto por su mujer, Isabel, y por sus hijos, y tengo gran admiración por el papel que ha desempeñado desde los años setenta en el País Vasco. Supo lo que era enfrentarse a una campaña de exterminio como la que padeció la UCD en aquellos años y como la que luego padecimos en el PP. Siempre le agradeceré que aceptara la candidatura a la alcaldía de San Sebastián tras el asesinato de Gregorio Ordóñez y su magnífico trabajo como ministro del Interior. Jaime es un hombre con principios y que dice la verdad. El problema era que había apostado muy fuerte en una partida arriesgada. Esa partida fueron las elecciones vascas de mayo de 2000. Si Jaime hubiese conseguido desalojar al PNV del poder con el apoyo de los socialistas, creo que él mismo habría presentado su candidatura al liderazgo del Partido Popular. De hecho,

había alcanzado un acuerdo con Nicolás Redondo Terreros que le despejaba el camino en sus aspiraciones nacionales: en caso de sumar los escaños suficientes para gobernar el País Vasco, Jaime sería presidente del Gobierno vasco los dos primeros años y Nicolás, los dos últimos. Era una operación política de gran envergadura. De haber tenido éxito, habría cambiado el rumbo político del País Vasco y del conjunto de España. Pero no salió como todos deseábamos.

Dentro de la jerarquía histórica del partido, el otro candidato natural era Mariano Rajoy. Mariano había tenido una exitosa carrera política desde principios de los años ochenta en Alianza Popular en Galicia. Conocía el partido como pocos y había sido un gestor eficaz en nada menos que cinco ministerios y en la vicepresidencia del Gobierno. De los tres aspirantes más claros a la sucesión, Mariano era el menos amigo mío. Teníamos un trato muy cordial, pero no era lo que cualquiera puede entender como un amigo. En todos los años en los que trabajamos juntos, ninguno de los dos había descolgado nunca el teléfono para decirle al otro «vamos el sábado a cenar», algo que sí ocurría con Rodrigo y con Jaime.

Esta falta de cercanía personal no afectaba en nada mi valoración sobre su capacidad política. Además de su historial de servicios en el partido y el Gobierno, Mariano parecía la persona más indicada para abordar los dos grandes retos del momento: proporcionar al Gobierno cierta continuidad política, con tranquilidad y sin sobresaltos, y neutralizar el ataque de la izquierda y de los nacionalismos contra el entonces previsible tercer mandato del PP.

En esos meses, era ya evidente que la izquierda estaba dispuesta a hacer lo que fuera para impedir que el Partido Popular volviese a ganar. Lo percibí con claridad tras la catástrofe del *Prestige*, cuando los socialistas responsabilizaron al Gobierno de que un petrolero naufragara en alta mar. Su política era la del todo vale para expulsar al PP del Gobierno. En esa estrategia se unieron al nacionalismo.

Tras nuestra victoria por mayoría absoluta en el año 2000, yo había hecho un intento serio de integrar al nacionalismo catalán. Había invitado a Convergència i Unió a entrar en el Gobierno en lo que podía convertirse en una gran operación de Estado que habría beneficiado mucho a Cataluña y al conjunto de España. Pero Pujol, como tantas veces a lo largo de su trayectoria política, había optado por objetivos coyunturales. Tres años después, el Gobierno catalán había cambiado de color, pero su estrategia de separación y enfrentamiento seguía siendo la misma. O peor. Primero fue el acuerdo de Gobierno entre el PSC y Esquerra Republicana de Catalunya. Luego vendrían el Pacto del Tinell para la exclusión del PP de la vida pública catalana, y la entrevista del vicepresidente de la Generalitat, Josep-Lluís Carod-Rovira, con la cúpula de ETA en Perpiñán. Yo tenía la impresión de que el desafío no había hecho más que empezar. Así lo había podido comprobar en la primera reunión que mantuve con Pasqual Maragall tras su investidura como nuevo presidente de la Generalitat, en noviembre de 2003.

Sentados en el despacho oficial de la Moncloa, interrogué a Maragall acerca de sus proyectos y objetivos. Me contestó que él quería ser como el gobernador de Nueva York, que mandaba sobre todas las áreas de gobierno y tenía una policía federal. Le contesté que en Estados Unidos la policía federal es una institución llamada FBI y que ni el gobernador de Nueva York ni el gobernador de ningún otro estado tiene competencias sobre ella. Pero él insistía en su reivindicación: «Yo quiero ser como el gobernador de Nueva York». Según Maragall hablaba, yo pensaba: «Esto no tiene sentido; esto no va a ningún sitio». Cuando acabó con lo del gobernador, siguió con el AVE. Me explicó que había que cambiar todo el planteamiento de las obras públicas en España: en lugar de un AVE Madrid-Barcelona, había que construir un AVE Barcelona-

Bilbao y otro Barcelona-Valencia, porque eso era lo justo y lo conveniente. Yo le escuché en silencio, hasta que, para terminar, me planteó su tercera exigencia. El Gobierno, me dijo, tenía que «aumentar el respeto y el reconocimiento a la lengua catalana». Le pregunté: «¿Y eso qué significa?». Maragall me contestó: «Pues que hay que respetarla más». «¿Y eso en qué consiste?» «En respetarla más.» Así terminó nuestra conversación. Una conversación circular, absurda, inútil, en la que Maragall no me decía lo que realmente pretendía porque no me lo podía decir.

Lo que de verdad pretendía Maragall se hizo explícito pocos meses después, cuando publicó un artículo en *El País* titulado «Madrid se va» y, en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI, afirmó que «cuatro años más de Aznar y España estalla». Maragall no buscaba un buen acuerdo para Cataluña, sino la confrontación con el PP y su exclusión de la vida pública. Su verdadero planteamiento era «cuatro años más de Aznar y hacemos que estalle España».

En este contexto, con la izquierda y los nacionalistas dispuestos a hacer lo que hiciera falta contra el PP, incluido socavar los principios del régimen constitucional —empezando por el consenso básico sobre el que se fraguó la Transición—, me incliné por Rajoy. Me parecía que la personalidad de Mariano era la más adecuada para gestionar un reto de estas características. Quizás porque era la más alejada de la mía, lo que en aquellas circunstancias me parecía una ventaja. Si hubiese pensado que Rato iba a administrar mejor el desafío del nacionalismo, lo habría propuesto. Pero, en este tema, Mariano me inspiraba más confianza. Rajoy y yo compartíamos la misma postura ante el nacionalismo. Mariano no sentía la menor simpatía hacia los nacionalistas —buena prueba eran sus años en la Xunta de Galicia—, pero, en cambio, sabía bien lo que era el Estado autonómico. Además, nunca se había refugiado en el burladero ante situaciones difíciles, como demostró frente a la manipulación que hizo la izquierda del desastre del *Prestige*.

No sería capaz de identificar el momento exacto en el que tuve claro que el mejor de los candidatos para afrontar los retos que entonces tenía España era Mariano Rajoy. Sí recuerdo que en noviembre de 2002 su nombre ya estaba escrito en mi cuaderno azul.

El 15 de noviembre de 2002, cogí un viejo Boeing 707 de la Fuerza Aérea con rumbo a la República Dominicana. Me acompañaban Ana y un grupo reducido de mis colaboradores. En otro avión viajaban los Reyes y la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio. Nos dirigíamos a la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se iba a celebrar en la localidad dominicana de Bávaro. Cuando sobrevolábamos el Atlántico, el secretario general de la Presidencia, Javier Zarzalejos, me avisó de que teníamos un problema. El comandante le había pedido que me transmitiera que, según todos los indicios, estábamos perdiendo líquido hidráulico. Aún no tenía claro si se trataba de una avería real o de un fallo en los sensores.

Le pedí al comandante que me explicara la situación. Me dijo que estábamos en contacto con Torrejón para averiguar el alcance del problema. Le pregunté qué consecuencias tendría la pérdida de líquido hidráulico y me contestó que no se podría bajar el tren de aterrizaje. En cuanto me confirmaron que la avería era muy seria y que no teníamos combustible suficiente para regresar a España, me puse en contacto con el avión del Rey para decirle a Don Juan Carlos dos cosas: primero, que nos adelantaran porque teníamos un problema mecánico potencialmente grave. Y, segundo, que si nos ocurría algo, en la cartera que llevaba conmigo en el avión había un cuaderno azul en el que estaba apuntado el nombre de la persona que en mi opinión debía hacerse cargo de la situación. No le dije nada más. Como si fuese fácil encontrar los restos de un cuaderno azul en un avión siniestrado... En todo caso, no fue necesario. Al final, bajaron

el tren de aterrizaje a mano y conseguimos tomar tierra. Fue el último esfuerzo de aquel viejo Boeing. Se quedó varado en mitad de la pista con todos nosotros dentro. Recuerdo la hora de agobiante calor que tardaron en evacuarnos con una mezcla de espanto y alivio.

Diez meses después, el 2 de septiembre de 2003, tras ser refrendado por la Junta Directiva Nacional, Mariano Rajoy asumió el control total del Partido Popular: le cedí todas las funciones de la presidencia del PP y me quedé en el Gobierno. De vez en cuando intercambiábamos impresiones sobre la evolución de la situación política, pero no interferíamos en las tareas o responsabilidades del otro. Ni yo consultaba con Mariano las decisiones del Gobierno ni Mariano me consultaba a mí las suyas como secretario general del PP y candidato a las elecciones generales, que convoqué para el domingo 14 de marzo de 2004. Él decidió el tipo de campaña que quería hacer y los temas que debían centrarla. Y yo me puse a disposición de mi partido para lo que quisieran. Es lo que me había comprometido a hacer en el Congreso Nacional de enero de 2002 y es lo que hice:

«Yo deseo ver a España, a nuestro país, convertido en una de las mejores democracias del mundo y, si me permitís la expresión, “donde me toque”. Pero yo no voy a parar. No voy a dejar de pensar y no voy a dejar de trabajar en otra cosa que en hacer de nuestro país una de las mejores democracias del mundo, sencillamente porque queremos serlo, porque tenemos capacidad para serlo.»

- **CAPÍTULO 6: EL PROYECTO EN MARCHA (1996)**  
Pactos para la estabilidad

La tradicional alianza de la izquierda con el nacionalismo ha servido para impedir que gobierne la derecha. Ha sido una alianza perjudicial para España porque la izquierda antepone a los objetivos comunes su pulsión de poder, y el nacionalismo, su pulsión disgregadora. Nosotros interpretamos el resultado de las elecciones generales de 1996 como una oportunidad para vertebrar una relación distinta con los partidos nacionalistas; una relación que superase la dinámica de confrontación y fortaleciese un proyecto de convivencia beneficioso para todos los españoles.

Representantes de CiU y del PNV habían empezado a acudir a los congresos de nuestro partido a partir de 1990. Manteníamos un diálogo con ellos que, como es lógico, algunas veces resultaba más fructífero que otras. La situación del PP en el País Vasco era, por definición, difícil. Y en Cataluña habíamos sobrevivido durante años como un partido prácticamente cautivo. Nosotros queríamos que el Partido Popular de Cataluña tuviera una posición clara, con capacidad de maniobra y de decisión, y que no fuera un mero satélite de CiU. Con ese objetivo promoví a Alejo Vidal-Quadras a la dirección del PP catalán. Aquella decisión tuvo que vencer no pocas reticencias y resistencias internas, pero cumplió su objetivo. Tiempo después, Alejo dejó la dirección del partido en Cataluña y se incorporó a la FAES como coordinador general. Luego también formó parte de las listas al Parlamento Europeo, del que es vicepresidente desde junio de 1999. Ninguna persona ajena al partido influyó sobre estas decisiones, que impulsé siempre con el respaldo de la mayoría de nuestros compañeros de Cataluña.

Desde las filas del nacionalismo catalán, una de las personas que contribuyó a que cerráramos el acuerdo de Gobierno fue Josep Antoni Duran i Lleida, líder de Unió Democràtica, partido coaligado al de Pujol en CiU. Duran llevaba tiempo colaborando

con nosotros y le interesaba el acercamiento al PP, sobre todo después de nuestra integración en el Partido Popular Europeo y en la Internacional Demócrata Cristiana, de la que Unió también formaba parte.

Pujol se tomó su tiempo. Venía de apoyar al Partido Socialista incluso contra el viento de la corrupción y la marea de la crisis económica. Y ahora tenía la posibilidad de prestar el apoyo decisivo a un Gobierno del PP. Decidió prolongar la negociación, un poco por necesidad, otro poco por regodeo, para demostrar que era imprescindible. En esa partida, jugó muchas cartas de las que conocí detalles significativos.

Mantuve dos conversaciones con Pujol: una, en el molino de Rodrigo Rato en Carabaña, y otra, en la casa del empresario Pedro Ballvé, que era amigo mío desde hacía muchos años. No entramos en ningún detalle concreto sobre el pacto de gobernabilidad que luego firmaríamos. De eso se ocupó Rodrigo y negoció muy bien. Había sido nuestro portavoz parlamentario y tenía excelentes relaciones con CiU. Mis conversaciones con Pujol fueron generales, de análisis histórico, político y económico de España, cuya existencia como marco común Pujol reconocía, lo que facilitaba el entendimiento.

Lo que no quiso hacer Pujol fue entrar en el Gobierno. Se lo ofrecí entonces y se lo volví a ofrecer en el año 2000, tras nuestra victoria por mayoría absoluta, cuando no necesitaba sus votos. Pero, a la hora de la verdad, Pujol no quiso asumir ningún compromiso. Prefirió instalarse en la «incomodidad». Pujol siempre decía estar incómodo. Lo dijo en la primera legislatura y lo dijo también en la segunda. Se quejaba de manera permanente. Nada era suficiente. Nada le satisfacía. Ni siquiera cuando desde su propio partido se reconocía que los acuerdos alcanzados con el PP eran buenos para Cataluña. Pujol suele acertar en las cosas pequeñas y equivocarse en las grandes. Decidió mantener abierto el bucle del victimismo y la reivindicación permanente. Estoy convencido de que fue una gran equivocación. Creo que Pujol perdió la oportunidad de ser el gran protagonista de un acuerdo histórico que habría beneficiado mucho a Cataluña.

Las negociaciones con CiU se centraron en varios ejes. El más importante fue el fiscal. Los dirigentes de CiU pusieron todo el énfasis en el porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) que el Estado debía ceder a la Generalitat. Sin embargo, desde el punto de vista nacionalista, lo verdaderamente relevante no era tanto el porcentaje, que ya estaba en el 15 por ciento, como la capacidad normativa sobre el tramo del impuesto cedido. Entonces todo el mundo hablaba de corresponsabilidad fiscal, y los nacionalistas pensaron que, al incrementar el tramo cedido hasta el 30 por ciento, automáticamente iban a obtener más ingresos. No era así de simple. En un determinado momento, Felipe González me dijo que, si los catalanes presionaban mucho, él se ofrecía a desempeñar el papel de dique de contención. Pero yo nunca sentí que estuvieran presionando mucho. Después, en el debate de investidura, González nos acusó de haber cedido demasiado.

Lo que entonces ni CiU ni los socialistas calibraron fue que a quien más beneficiaba el nuevo sistema de financiación (que se extendió al resto de las comunidades autónomas el 23 de septiembre mediante un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera) era a las regiones con más margen para el crecimiento. Cataluña tenía un recorrido fiscal mucho más limitado que, por ejemplo, Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, y, por tanto, sus bases fiscales se expandieron menos que las de otras comunidades en los años de fuerte crecimiento económico. Esto no fue óbice, sin embargo, para que las regiones gobernadas por el Partido Socialista se opusieran al nuevo sistema, con Andalucía a la cabeza. Recuerdo unas declaraciones de Manuel Chaves criticando el acuerdo pero sumándose a él.

Sigo pensando que el nuevo modelo de financiación que pactamos en 1996 era razonable y bueno. Lo ampliamos en 2002 y creo que, si el PSOE de Rodríguez Zapatero no hubiese decidido cambiarlo de manera innecesaria, la situación de España sería hoy bastante mejor.

El pacto con CiU se cerró en el hotel Majestic de Barcelona el 28 de abril de 1996. Pujol apuró al máximo los plazos y luego explotó política y mediáticamente el acuerdo todo lo que pudo. Lo presentó al mismo tiempo como un triunfo para Cataluña y un gesto de generosidad por su parte. Lo cierto es que fueron unos buenos pactos. Unos pactos que ponían fin a una anomalía histórica y en los que no había nada que el Estado no pudiera razonablemente aceptar y asumir.

Adelantándose a un acuerdo de gobernabilidad que daban por hecho, Coalición Canaria nos había ofrecido su apoyo en cuanto ganamos las elecciones. Con sus cuatro escaños

y los diecisiete de CiU, teníamos garantizada la investidura. Sin embargo, decidimos buscar también el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Lo hicimos por una cuestión de conveniencia política. Queríamos romper el cerco nacionalista a escala nacional y ganar protagonismo en el País Vasco. El interlocutor natural con el PNV era Jaime Mayor y se manifestó muy favorable a ese acercamiento. A mí también me pareció importante y de inmediato nos pusimos a trabajar para lograrlo. El propio Jaime redactó las bases del acuerdo.

- **CAPÍTULO 7: UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA: ESPAÑA VA A ENTRAR EN EL EURO (1996-1998)**  
Frente al escepticismo, hechos

Yo compartía la preocupación del BCE y ofrecí a Duisenberg mi apoyo. Le expresé mi compromiso con la estabilidad macroeconómica; le aseguré que defendería las políticas de disciplina fiscal y flexibilidad económica cuando la discusión se planteara en las instituciones europeas; y me ofrecí a exponer los buenos resultados conseguidos por los españoles como argumento de persuasión a favor de la estabilidad. España era entonces una abanderada de la estabilidad económica. Por su tamaño y por el proceso de reformas que había seguido, era un país que había que tener en cuenta en el debate sobre si convenía relajar la disciplina fiscal para fomentar el crecimiento o si, por el contrario, esa relajación erosionaría las posibilidades de prosperidad a medio plazo. Sin ánimo de dar lecciones a nadie, pero con la satisfacción de haber cumplido y con la convicción de que era bueno para nuestro país y para Europa, podíamos explicar lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho y los beneficios que empezábamos a obtener. Así lo hicimos a instancias del BCE.

A simple vista, aquella conversación mía con Duisenberg podía resultar insólita: el BCE le estaba pidiendo a un país periférico al que todos habían considerado un modelo de incumplimiento que le ayudara a convencer a los países centrales de la Unión de las bondades del rigor presupuestario. Sin embargo, tenía su lógica. El caso español era un buen argumento en defensa de las políticas de contención del gasto. Pero también, por los excesos de los años socialistas, podía servir como advertencia sobre los riesgos de la irresponsabilidad fiscal. La pertenencia de España al euro y las reformas

económicas produjeron en nuestro país unos resultados espectaculares en términos de prosperidad y empleo. La confianza y la fiabilidad se dispararon. España se convirtió en punto de referencia. Además del éxito político de la Transición de una dictadura a una democracia, a partir de ese momento los españoles también pudimos presentar como aval el éxito económico de una gran prosperidad en un marco de estabilidad. Esto tuvo consecuencias muy positivas para la posición e influencia de España en el mundo. Unas consecuencias, que en sentido inverso, estamos padeciendo por el doble error de abandonar el camino político de la Transición y la senda económica de la austeridad y las reformas.

Los primeros en incumplir el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fijaba en un 3 por ciento el máximo de déficit público y en un 60 por ciento el tope de la deuda pública, fueron la Francia de Chirac y la Alemania de Schroeder. Pero no fueron los únicos. En España, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero decidió modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria que habíamos aprobado nosotros en 2001. Luego se saltó a lo grande el pacto europeo de estabilidad para llevar el déficit público hasta el 11 por ciento en 2009. Con un agravante para España: el coste de incumplir es siempre más alto para un país periférico que para uno central.

Esto lo sabíamos desde el principio; sabíamos que tanto los beneficios de cumplir como los costes de no hacerlo serían mayores para España que para el resto de sus socios. No respetar las reglas de la disciplina presupuestaria y pensar que la prosperidad es gratis y perpetua han sido dos errores colosales. A España le fue bien cuando fuimos ejemplo de cumplimiento, y ahora no sabemos cuándo terminaremos de pagar el coste de haber dejado de serlo.

El 1 de enero de 1999, España entró en el euro junto con otros diez países: Alemania, Francia, Italia, los Países Bajos, Portugal, Bélgica, Austria, Finlandia, Irlanda y Luxemburgo. Grecia no entraría hasta enero de 2001.

Habíamos conseguido cerrar 1998 con un déficit público del 3 por ciento y habíamos sentado las bases de una política económica sólida, previsible y estable, que favorecía el crecimiento y la generación de empleo. España crecía a un ritmo del 4 por ciento y la tasa de paro empezaba a bajar de manera vertiginosa. Cuando llegamos al Gobierno, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, me había dicho: «Presidente, con una prima de riesgo en quinientos puntos no podemos vivir». Un año más tarde, esa cifra se había reducido a la mitad. Poco después, había dejado de existir; ya no había prima de riesgo española porque nuestra deuda estaba mejor valorada que la alemana. El cambio era espectacular.

Si España no hubiese entrado en el euro como lo hizo, en el grupo de cabeza y con un compromiso claro con sus principios y requisitos, se habría dado la razón a quienes hacen de la resignación una forma de hacer política. Lo que yo llamo «la política de lo imposible y de lo inevitable»: imposible hacer de España un país fiscalmente disciplinado; inevitable incurrir en altas tasas de déficit; imposible recortar el gasto y crear empleo; inevitable tener un elevado paro estructural; imposible bajar los impuestos y recaudar más; inevitable subirlos para mantener los servicios sociales...

Todos esos tópicos se fueron desmontando cuando cumplimos la política de austeridad y flexibilidad del euro. Hicimos posible todo lo que algunos decían que era imposible. Fue posible llegar a tiempo, cumplir las normas y estar entre los países más prósperos. Fue posible introducir una cultura de la estabilidad económica. Fue posible recortar el gasto y crear empleo. Y fue posible bajar los impuestos y obtener más ingresos para ampliar y mejorar los servicios públicos españoles.

El éxito de España recibió muchos elogios fuera, pero también generó algunas suspicacias que no tardaron en hacerse notar. La incorporación de España a las grandes

decisiones colectivas no debería haber despertado ningún recelo. España es una gran Nación europea, la primera Nación europea en términos históricos, y era perfectamente lógico y normal que participara como protagonista en el proyecto de construcción de una Europa más fuerte y más unida.

Entrar en el euro fue una gesta colectiva, que demostró que los españoles somos capaces de conseguir grandes logros cuando somos convocados a un proyecto común de avance y modernización. Demostró que España no era «diferente» ni estaba condenada a languidecer en la periferia de las grandes decisiones y los grandes hechos históricos. Que así como ningún país tiene el monopolio del éxito, tampoco ninguno está sentenciado al fracaso. Que el futuro depende del acierto o el error de las decisiones que tomamos, individual y colectivamente. España tenía problemas, como tantos otros países, pero demostró que era capaz de solucionarlos. Eso significó nuestro ingreso en el euro: la constatación de la capacidad de la Nación española para superar las peores crisis y compartir el camino de la prosperidad con las grandes democracias del mundo.

- **CAPÍTULO 7: UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA: ESPAÑA VA A ENTRAR EN EL EURO (1996-1998)**

**La cultura de la estabilidad**

He comentado que para nosotros el euro no era un propósito en sí mismo, sino un instrumento para conseguir un objetivo superior: la modernización de la economía española. No era un punto de llegada, sino el inicio de un camino nuevo para España. Un camino que debía permitirnos dejar atrás la tradicional falta de credibilidad de la economía española y su también tradicional inestabilidad, que se manifestaba en crecimientos muy rápidos en los momentos expansivos del ciclo y profundas crisis en los momentos de contracción. Pero para eso debíamos cumplir una condición adicional a las exigidas para el ingreso en el euro: debíamos perseverar en el empeño. Para que los efectos positivos de la moneda única fueran duraderos y para que nuestra economía pudiese crecer, promover la creación de empresas, generar nuevos puestos de trabajo y competir con fuerza en el mundo, debíamos entender que el euro era un punto de partida.

Esta idea del euro como punto de partida fue uno de los ejes de mi discurso en aquellos años. Suponía un cambio profundo no sólo en las políticas, sino también en la cultura económica arraigada en España hasta la fecha. De una cultura del gasto, el endeudamiento y la volatilidad, debíamos pasar a una cultura del control presupuestario, el rigor y la estabilidad. Así lo intenté explicar en las muchas intervenciones que dediqué a promover esta nueva «cultura de la estabilidad». Me viene a la memoria un discurso que pronuncié ante la Asociación para la Unión Monetaria Europea en mayo de 1999:

«Es nuestra responsabilidad proseguir sin pausas ni interrupciones el proceso de consolidación fiscal que nos permita dotar al área euro de unos fundamentos macroeconómicos sólidos y estables. [...] La indisciplina fiscal y el endeudamiento excesivo de la presente generación resultan profundamente insolidarios con las generaciones que nos han de seguir.»

Creo que el tiempo ha demostrado que aquellas reflexiones no iban mal encaminadas. Sobre todo la advertencia acerca de la insolidaridad que para las generaciones futuras supone tirar de chequera como si el dinero público no fuese de

nadie. Cuando se olvidó que el euro era un punto de partida, cuando se arrinconó la cultura de la estabilidad y se volvió a la política del gasto sin límite y sin control, se abrió la puerta a la recesión, el encarecimiento del crédito y la destrucción de empleo. Como ha dicho alguna vez ese brillante economista que es Juan Velarde, las deudas, o las pagas, o te las cobran. Y cuando te las cobran, lo hacen en lo que más te duele: pensiones, prestaciones por desempleo, sanidad, educación y posibilidades de futuro como país.

El primer Gobierno del Partido Popular tuvo la responsabilidad de hacer que España fuera socio fundador del euro. Tuvo la satisfacción de ver cómo entre todos lográbamos ese gran objetivo nacional. Y pudo comprobar cómo con el euro España alcanzaba un desarrollo económico y social sin precedentes. La reducción de impuestos incentivó el consumo, dinamizó la economía y aumentó los ingresos públicos. La responsabilidad en el gasto público nos permitió ampliar nuestra sociedad del bienestar, nuestro sistema de pensiones y nuestra cohesión social. La privatización de las grandes empresas públicas españolas y los bajos costes financieros del euro impulsaron la internacionalización de nuestra economía, sobre todo en América Latina. Los bajos tipos de interés facilitaron a muchas familias acceder a una vivienda, y a miles de emprendedores, obtener un crédito para poner en marcha sus negocios. El resultado fue una creación de empleo desconocida en España. Y el empleo, como hemos dicho en tantas ocasiones, es la mejor política social, la que concede autonomía a las personas y les permite aspirar a un futuro mejor.

Es verdad que sometimos al país a un ritmo de cambio muy elevado. Fuimos muy deprisa. Alguien podría pensar que demasiado deprisa. Pero lo hicimos porque las oportunidades son las que son. En la vida, las oportunidades no se eligen, sino que se presentan y luego cada uno decide si las aprovecha o no. Y la oportunidad del ingreso en el euro, o la aprovechábamos sin vacilaciones ni cálculos pequeños, o la perdíamos. Creo que aquella experiencia puede ser útil en estos momentos de crisis.

En la política, el tiempo es un factor esencial. Si lo tienes, no lo malgastes; al contrario, compórtate como si no lo tuvieses. Y si no lo tienes, procura anticiparte, porque, si no te anticipas, tu oportunidad pasará. Y la historia nos enseña que las oportunidades son muy pocas y no suelen pasar dos veces.

- **CAPÍTULO 8: UNA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA ETA: LA DEMOCRACIA PASA A LA OFENSIVA (1996-1999)**  
Víctimas, héroes y mártires

Entre julio de 1997 y junio de 1998, ETA asesinó a nuestros compañeros Miguel Ángel Blanco, José Luis Caso, José Ignacio Iruretagoyena, Alberto Jiménez-Becerril y su mujer, Ascensión García Ortiz, Tomás Caballero y Manuel Zamarreño. Asistí a los funerales de cada uno de ellos acompañado siempre por Ana. Su apoyo y su fortaleza me ayudaron mucho en aquellos momentos tan duros. Vivimos situaciones tremendas, de un profundo dolor, en las que los sentimientos de solidaridad de unos hacia otros, y el extraordinario valor y dignidad de los familiares de las víctimas, fueron nuestro único consuelo. Todos éramos conscientes de lo que nos jugábamos y de la envergadura brutal del desafío. ETA había decidido ir a por todas contra el PP y no cejaría en su empeño.

Unos años después, en 2001, intentaría matar a toda la dirección del PP vasco de un solo golpe. Fue en el cementerio de Zarauz, al que Carlos Iturza, María San Gil y otros compañeros habían acudido para rendir homenaje a nuestro concejal asesinado José Ignacio Iruretagoyena. Por fortuna, la bomba que los terroristas habían escondido en un macetero falló.

Cada asesinato era una prueba. Nuestros concejales y cargos públicos estaban siendo eliminados por formar parte de un partido que, desde la responsabilidad del Gobierno de la Nación, había decidido aplicar una política de máxima firmeza contra el terror. Servidores públicos que no tenían privilegios de ningún tipo. Personas que eran capaces de superar el miedo, la lógica angustia que supone vivir bajo la coacción permanente del terror, gracias a su valentía personal y a su compromiso con la democracia y la libertad.

Ningún representante político del PP se sentía a salvo. Con el asesinato del concejal de Sevilla, Alberto Jiménez-Becerril, y su mujer, *Ascen*, cuando regresaban a casa después de cenar, ETA extendió su amenaza al Partido popular de toda España. Su objetivo estaba claro: se trataba de someter al Gobierno de la Nación a una presión insoportable para que doblase la rodilla y accediese a negociar. Un miembro de ETA lo había enunciado con crudeza: «El día que vayan [representantes del PSOE, PP, PNV] a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelvan a casa tal vez piensen que es hora de encontrar soluciones o quizás les toque estar en el lugar en que estaba el otro, o sea, en una caja de pino y con los pies por delante».

La estrategia con nosotros no funcionó. Pero sí es cierto que ETA puso nuestra capacidad de resistencia al límite. Cada asesinato era un mazazo. Y para mí, una prueba política y personal muy dura. Yo estaba convencido de que debíamos perseverar en la firmeza democrática. Pero eso no significa que no sufriera con cada atentado ni que dejara de plantearme hasta qué punto podía seguir pidiéndoles a mis compañeros de partido que aguantaran. Hubo momentos especialmente dramáticos. Uno de ellos fue el asesinato de Manuel Zamarreño, concejal del PP en el Ayuntamiento de Rentería, el 25 de junio de 1998. En su funeral vi a un niño que lloraba desconsolado. Pregunté quién era y me dijeron que era uno de sus hijos.

La imagen cruel y humillante del cadáver de Zamarreño tirado en la calle, junto al portal de su casa, con la ropa arrancada por la explosión de una moto bomba, destrozó la moral de nuestra gente. Poco después del asesinato, me reuní para comer con la dirección y los cargos públicos del PP del País Vasco. Era un día gris, plomizo, triste; el ambiente pesaba como una losa sobre todos nosotros. No hacía falta que nadie verbalizara ningún reproche. Bastaban las miradas para entender lo que muchos pensaban: «Mira bien cuántos estamos porque no sabemos cuántos faltaremos en la próxima cita. Aparte de que nos maten, ¿qué más quieres que hagamos?». No eran miradas de queja, sino de aceptación de un destino que, en esos momentos de desolación, parecía inevitable.

Uno de mis colaboradores me contó luego que había comido en la mesa junto a dos concejales ya de cierta edad y que éstas le habían dicho: «¿Sabes lo que hicimos cuando vimos cómo habían dejado a Zamarreño? Pues yo llamé a ésta—contó señalando a su compañera de mesa y también concejala— y le dije: “Vámonos a El Corte Inglés a comprarnos ropa interior; así, si nos toca, que por lo menos estemos limpias y presentables”. Y nos fuimos a El Corte Inglés esa misma tarde ». La anécdota ilustra bien la mezcla de resignación y valentía con la que nuestra gente hacía frente a la coacción cotidiana de ETA. Algunos no pudieron soportar la presión. Recuerdo que en aquella comida intervino un concejal para decir que simplemente no podía más. Comprendí su angustia y respeté su decisión.

- **CAPÍTULO 8: UNA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA ETA: LA DEMOCRACIA PASA A LA OFENSIVA (1996-1999)**

### El frente nacionalista

Volví a recibir a Ardanza un mes después. La conversación discurrió en el buen tono que siempre había caracterizado nuestra relación, pero sólo sirvió para constatar nuestras diferencias. Él no había tocado su plan y yo no estaba dispuesto a ceder en cuestiones que para nosotros eran fundamentales. A partir de ese momento, creo que Ardanza se limitó a administrar el fracaso de su iniciativa. El 12 de marzo hizo público el texto final del plan y lo sometió a los partidos de la Mesa de Ajuria Enea, con el resultado que para entonces ya era perfectamente previsible.

De aquellas reuniones saqué la impresión de que a Arzalluz no le interesaba nada el Plan Ardanza. Ésa no era la «hoja de ruta» del PNV. Arzalluz estaba ya en otra cosa. Pocos días después de nuestra comida, nos llegaron noticias de que el PNV estaba teniendo más que contactos con el brazo político de ETA en Bruselas.

A principios de 1998, el PNV se había descolgado con una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la política de alejamiento y dispersión de los presos etarras. El gesto llamaba la atención porque en sus orígenes el PNV había defendido esa misma política. Nuestro distanciamiento se acentuó en los meses siguientes. La relación del PNV con el PP en el País Vasco era cada vez más competitiva en términos políticos y electorales, y el 25 de octubre se celebraban elecciones al Parlamento de Vitoria. Con la excusa del fracaso del Plan Ardanza, Arzalluz puso en marcha una estrategia de convergencia con el mundo de ETA. El objetivo era formar un frente nacionalista para avanzar hacia la «construcción nacional». El principal instrumento de esa estrategia conjunta fue la tregua que ETA declaró el 16 de septiembre de 1998, un mes antes de las elecciones. La propia secuencia de los acontecimientos dejaba en evidencia la connivencia entre unos y otros, y el carácter meramente instrumental del anuncio de la banda: primero los partidos nacionalistas firmaron con el brazo político de ETA el acuerdo para formar un frente común —el Pacto de Estella—, y después ETA declaró la tregua.

Ya en mayo me habían llegado ondas de que algo estaba pasando en las relaciones entre el PNV y el mundo de ETA. Se lo comenté a Jaime Mayor y quedé en hacer las averiguaciones correspondientes. Pasaron las semanas y, aunque los nacionalistas eran cada vez más explícitos en sus declaraciones de acercamiento al entorno etarra, seguía sin saberse el alcance exacto de lo que se estaba gestando. Insistí varias veces, pero nadie vio la envergadura de la operación que estaba en marcha.

Sabíamos que el PNV no quería una ETA derrotada porque temía que esa derrota pudiera debilitar al nacionalismo y acabar con su relato del conflicto secular entre España y los vascos. El PNV, en particular Arzalluz, empezó a propagar la falacia de que ETA estaba en una situación muy complicada, que necesitaba «una pista de aterrizaje», una «salida digna» para dejar el terrorismo, y que bastaba con ofrecerle una «solución razonable» para sus presos. Creo recordar que llegó a hablar de una ETA «acorralada». También resurgió con fuerza el concepto de «empate infinito», acuñado por el propio mundo de ETA unos años antes como propaganda en contra de la eficacia policial.

El 16 de septiembre de 1998, ETA declaró una tregua «ilimitada», con una «suspensión general» de actividades pero sin un emplazamiento expreso al Gobierno para negociar. No estábamos ante el fruto de una negociación entre los terroristas y el Estado, sino ante el instrumento de un acuerdo entre nacionalistas con objetivos que

iban completamente en contra de la legalidad: ruptura del marco estatutario y constitucional, independencia, Navarra, impunidad y exclusión de los no nacionalistas. Se trataba de embarcar al conjunto del nacionalismo en una aventura rupturista y sectaria.

- **CAPÍTULO 8: UNA NUEVA ESTRATEGIA CONTRA ETA: LA DEMOCRACIA PASA A LA OFENSIVA (1996-1999)**  
La «tregua-trampa»

El gran reto del Gobierno en aquellos meses fue administrar la situación creada por la tregua de ETA. Teníamos claras dos cosas. Primero, íbamos a rechazar cualquier intento de «internacionalizar » la tregua; es decir, no íbamos a aceptar ninguna injerencia de los siempre dispuestos mediadores internacionales, que sólo sirven para dar pábulo a la patraña sobre el «conflicto vasco» y para colocar a España bajo presión. Segundo, íbamos a mantener informados a los españoles de lo que hacíamos y de lo que pensábamos hacer. Por eso anuncié públicamente que había autorizado contactos con el MLNV (movimiento de liberación nacional vasco). Algunos interpretaron esa mención al MLNV como una rendición dialéctica, cuando ésa es la denominación que recibe el complejo político y social dirigido por ETA. Al utilizar esas siglas, yo estaba haciendo público que el Gobierno se iba a reunir con ETA y también con representantes de su partido político.

El 11 de diciembre de 1998 tuvo lugar un encuentro entre miembros de Euskal Herriarrok y las tres personas a las que designé como representantes del Gobierno: el secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, Javier Zarzalejos y Pedro Arriola. Los portavoces de la antigua Herri Batasuna dijeron que ellos eran políticos y que sólo estaban ahí para hablar de política; que si nuestra intención era hablar del cese de la violencia, que habláramos con ETA. Como nosotros de política no teníamos nada que hablar con ninguno de ellos, la reunión no fue a más.

La presión para que hiciéramos cambios en la política penitenciaria fue en aumento. Todos los grupos políticos, también los socialistas, reclamaban al Gobierno que acercara presos terroristas al País Vasco. Unos porque creían que podía ser útil para la «paz». Otros, por cálculo y conveniencia política; porque creían que cualquier gesto hacia el mundo de ETA favorecía a la causa nacionalista. Entonces no teníamos mayoría absoluta y el marco legal penitenciario era todavía muy laxo. No pudimos modificarlo hasta la legislatura siguiente, cuando aprobamos la Ley de Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas y creamos un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional.

Yo estaba dispuesto a tomar decisiones en el ámbito penitenciario con dos condiciones: que se mantuviera la política de dispersión y que no hubiera concentración de terroristas en unas pocas cárceles. Con estas limitaciones, y con el respaldo de una resolución parlamentaria aprobada por unanimidad el 10 de noviembre de 1998, acordamos el traslado a la Península de los presos de ETA que estaban en Canarias y en Ceuta y Melilla. Unos meses después, hicimos un segundo traslado.

Fueron decisiones tasadas, públicas y reversibles, que ETA desdeñó porque no era lo que buscaba. La tesis de que la banda había decidido perseguir sus objetivos exclusivamente por vías políticas y que, por tanto, le bastaba con solucionar la situación

de los presos para abandonar la violencia se había convertido en un mantra sin base en la realidad. Nosotros sabíamos que ETA no había renunciado ni a sus fines ni a sus medios: pretendía una negociación en toda regla en torno a sus exigencias políticas de siempre y, si hiciera falta para conseguirlas, estaba dispuesta a volver al terror. Así lo pudieron corroborar Javier Zarzalejos, Ricardo Martí Fluxá y Pedro Arriola.

El Gobierno del PP mantuvo una única reunión con la dirección de ETA. Tuvo lugar en Suiza el 19 de mayo de 1999. La fecha se fijó por mediación de monseñor Juan María Uriarte, que entonces era obispo de Zamora y luego lo fue de San Sebastián. Hubo un intercambio previo de comunicaciones para acordar el formato del encuentro.

Para nosotros, la finalidad de la reunión estaba muy clara. Se trataba de comprobar si la tregua era o no un cese definitivo de la violencia. Para eso la autoricé y para nada más. El encuentro no formó parte de ninguna negociación ni en él se negoció nada.

A su vuelta de Suiza, Javier, Ricardo y Pedro vinieron directamente a verme a la Moncloa. Inmediatamente, hablé con el Rey y convoqué a Joaquín Almunia para informarle del encuentro. Ricardo se trasladó al ministerio para despachar con Jaime Mayor. La reunión de Suiza había constatado la diferencia insalvable entre las posiciones del Gobierno y de ETA. Aunque se dejó abierta la posibilidad de un segundo encuentro, ETA desistió al comprobar que no podía obtener ninguna de sus pretensiones. ETA no estaba dispuesta a seguir hablando con un Gobierno que no negociaba con terroristas acerca de política. Y para nosotros ETA no era interlocutor político porque mi Gobierno no hablaba de política con terroristas.